



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTES	María Alejandra Holguín Zapata y Ángela María Holguín Zapata
DEMANDADO	Protección S.A.
RADICADO	05-001-31-05-010-2016-00878
TEMA	Acrecimiento pensional
DECISIÓN	Revoca y confirma sentencia

El quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, declara abierto el acto y previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **057** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **ALEJANDRA HOLGUIN ZAPATA** y **ÁNGELA MARÍA HOLGUÍN ZAPATA** contra la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A.**, con radicado **05-001-31-05-010-2016-00878**.

• **PRETENSIONES:**

Las demandantes pretenden que se declare que les asiste el derecho al 50% de pensión de sobreviviente, y, en consecuencia, se condene a **PROTECCIÓN S.A.** al pago del 100% de la pensión de sobrevivientes a partir del momento del fallecimiento del causante **EDWIN ALFONSO HOLGUIN**; al pago del retroactivo dejado en reserva, las mesadas dejadas de pagar, los reajustes legales anuales, las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, los intereses moratorios, y las costas procesales.

• **HECHOS:**

Como fundamento de sus pretensiones manifestó que el 11 de febrero de 2015, se le reconoció la pensión de sobreviviente a ÁNGELA MARÍA HOLGUÍN ZAPATA, en calidad de hija menor del señor EDWIN ALFONSO HOLGUIN, otorgándole el 25% de la mesada pensional, y de igual manera se le reconoció a la joven ALEJANDRA HOLGUÍN ZAPATA, en condición de hija mayor el 25% de la mesada pensional. Que se dejó en reserva el 50% del beneficio pensional reconocido debido a una presunta beneficiaria en calidad de compañera permanente, hasta tanto esta administradora reciba información que permita establecer si cumple con los requisitos para ser reconocida como beneficiaria. Que, pese a lo establecido, PROTECCIÓN S.A., solo se les consignó lo correspondiente a un 25%, tal como se demuestra con el recibo de pago #033740. Que el 27 de mayo de 2015, elevaron derecho de petición a PROTECCIÓN S.A., a fin de que se modificara el acto administrativo mediante el cual se le había otorgado y reconocido un porcentaje del 50% de la pensión de sobrevivientes a que tenía derecho por la muerte de su padre, y se ordena el reconocimiento y pago del 100% de la pensión de sobrevivientes. Y que el 5 de noviembre de 2015, PROTECCIÓN S.A. da respuesta a la solicitud elevada el 27 de mayo de 2015 y después de hacer un análisis de leyes y apreciaciones legales se concluye que para acceder a lo solicitado es necesario iniciar proceso judicial en su nombre, y que sea un juez quien determine el porcentaje dejado en reserva a quien le corresponde.

- **CONTESTACIÓN:**

✓ PROTECCIÓN S.A.:

Frente a los hechos manifestó que es cierto que se les reconoció el 25% a cada una de las hijas, sin embargo, es preciso poner de presente que las jóvenes MARÍA ALEJANDRA y ÁNGELA MARÍA HOLGUIN ZAPATA, son mayores de edad en la actualidad, por lo que deberán comparecer al proceso de forma personal. Que es cierto lo manifestado en el comunicado 71023267. Que no es cierto que solo se les consignó lo correspondiente a 25%, tal y como se demuestra con el recibo de pago #033740, ya que el 100% del retroactivo corresponde a la suma de \$13'427.300 por lo que el 50% correspondiente a las hijas es de \$6'713.650, por lo que a cada una le corresponde \$3'356.825, menos costos de transferencias bancarias, por lo

que a cada una se les pago \$3'517.912, tal como consta en el soporte de folio 17 de la encuesta. Que es cierto que el 27 de mayo de 2015, elevan derecho de petición ante PROTECCIÓN S.A., a fin de que se modificara el acto administrativo, dándosele respuesta a lo solicitado. Y que es cierto que, a la fecha de esta demanda, no les ha sido reconocido su derecho a la pensión de sobreviviente en un 100%. Se opuso a todas las pretensiones. Y planteó varias excepciones de fondo.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 16 de septiembre de 2022, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, **CONDENÓ** a **PROTECCIÓN S.A.** a pagar a \$3'359.669 a las demandantes, por el retroactivo reconocido y no pagado que se generó, en el 25% del valor de la mesada mínima, causado entre el 28 de mayo de 2013 y el 31 de enero de 2015.

Como consecuencia, **CONDENÓ** a PROTECCIÓN a reajustar la mesada de la pensión de sobreviviente reconocida a las demandantes, otorgarles el 100% de la prestación, distribuida en un 50% para cada una de ellas, con efectos a partir del 28 de mayo de 2013 y hasta tanto existan las causas que dieron origen sus derechos, para el caso de **MARÍA ALEJANDRA HOLGUÍN ZAPATA** hasta el 29 de mayo de 2012 fecha en que cumplió 18 años o hasta el 29 de mayo de 2021, siempre y cuando haya acreditado ante **PROTECCIÓN S.A.** la calidad de estudiante durante el tiempo posterior a la fecha en que llegó a la mayoría de edad; y en el caso de **ÁNGELA MARÍA HOLGUÍN ZAPATA** hasta el 2 de septiembre de 2016, calenda en que llegó a la mayoría de edad o hasta el 2 de septiembre de 2023, fecha en la que alcanza 25 años de edad, siempre y cuando, allegue las certificaciones académicas correspondientes ante **PROTECCIÓN S.A.**

PROTECCIÓN S.A. deberá acrecentar el derecho de **ÁNGELA MARÍA HOLGUÍN ZAPATA**, mientras subsista su derecho y conforme se extinga el adquirido por **MARÍA ALEJANDRA HOLGUÍN ZAPATA**, de suerte que sea cancelada en cada vigencia la totalidad del 100% de la prestación causada.

Del retroactivo que se genere se deberá descontar el importe ya pagado por la administradora para cada vigencia, así como el porcentaje destinado al sistema de seguridad social en salud.

CONDENÓ a PROTECCIÓN S.A. a pagar a las demandantes los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que deberá calcular sobre el valor retroactivo del reajuste ordenado, a partir del **10 de diciembre de 2013** y hasta que se satisfaga la totalidad de la obligación.

DECLARÓ no probada la excepción de prescripción.

Y, **CONDENÓ** en costas a PROTECCIÓN S.A.

- **APELACIÓN:**

- ✓ PROTECCIÓN S.A.:

El apoderado de la entidad accionada, en su recurso de apelación manifestó que existe inconformidad frente al reconocimiento de las mesadas pensionales dejadas en reserva, debido a que no existe argumentos para reconocer lo dejado en reserva que fuera dispuesto eventualmente para la potencial beneficiaria en calidad de compañera permanente del afiliado. Y, por ende, considera que ya se cumplió con el reconocimiento prestacional en 50%, es decir, el 25% para cada una de las hijas del afiliado fallecido.

Que se allegó dentro del proceso prueba documental frente a la justificación o respaldo que contaba PROTECCIÓN S.A. en su momento, pues bajo los criterios bien establecido en la sentencia SL2942 de 2021, donde se justifica dejar en reserva la prestación de otra persona con un mejor o igual derecho, por lo que se allegó una declaración extra juicio donde se indica que el afiliado estuvo cohabitando bajo el mismo techo, lecho y mesa, lo que claramente enuncia la consolidación de un nuevo núcleo familiar, y así se considera la existencia de una potencial beneficiaria, que a futuro disputara el derecho, no siendo una persona que se acercara a PROTECCIÓN S.A. con el fin de reclamar el derecho.

Que lo cierto es que frente a la verificación, consolidación y la existencia de una persona, que pudiera tener u ostentar un derecho que entrara en contravía del derecho reclamado, que tanto fuera entonces dispuesto por el juez de primera instancia de iniciar la vinculación de esta parte con el fin de verificar si tenía o no interés de pertenecer a la presente Litis, situación que podría hacerlo a futuro, pues configura como tal, la existencia de potencial beneficiaria, que a futuro pudiera disputar el derecho que se encuentra en cabeza de las demandantes.

Que la situación goza de respaldo frente al momento de la solicitud de la prestación, donde las reclamantes corroboraron dicha circunstancia sobre la existencia de otra persona que pudiera entonces haber cohabitado o que existiera o que generara una duda razonable de tal magnitud, que se pudiera considerara dejar la prestación en reserva, y bajo estos eventos excepcionales se refiere a la sentencia mencionada, pues se trata de una prestación consolidada en favor de otras personas, no es menester hacer extensivos los efectos de los intereses moratorios, cuando existe una incertidumbre frente a los beneficiarios o titulares del derecho pensional, y esa duda se dio a raíz de la concurrencia de otra persona, de las cuales las mismas demandantes dieron fe de que esta misma cohabitó con el fallecido.

Que no existen fundamentos fácticos ni jurídicos, y bajo esta justificación de orden jurisprudencial goza bajo los presupuestos de legalidad y validez, la negativa de PROTECCIÓN S.A. en su momento de no reconocer la prestación y por ende dejarla en reserva.

Que no hay lugar a reconocer los intereses moratorios de las cuales, según el fallador de primera instancia, PROTECCIÓN S.A. pudiera reconocer.

Y que, por tratarse de una situación accesorio, no hay lugar a la condena de costas procesales bajo el entendido de que el actuar de PROTECCIÓN S.A. se dio conforme a derecho.

- **ALEGATOS:**

- ✓ PROTECCIÓN S.A.:

Una vez transcurrido el término de traslado, la parte demandada en sus alegatos en síntesis solicitó que absuelva de todas y cada una de las condenas de las que fue objeto, toda vez que a través de información suministrada por la madre de las demandantes CLAUDIA MARÍA ZAPATA, que el señor HOLGUIN convivía al momento de su deceso con una señora de nombre LUZ MARINA PÉREZ, razón por la cual dejó en reserva el 50% restante, hasta tanto la justicia ordinaria defina si dicha persona tiene la calidad de compañera permanente del causante o si por el contrario no se acredita tal condición, evento en el cual acrecerá el porcentaje en favor de las hijas del causante. Que, si bien PROTECCIÓN S.A. no ha negado el pago del 50% de la pensión de sobreviviente que se dejó en reserva, es de tener en cuenta que la señora LUZ MARINA PÉREZ, no ha acreditado el término de convivencia con el causante en la forma establecida, razón por la cual, hasta tanto no se acredite su condición de beneficiaria, no existe obligación alguna a cargo de PROTECCIÓN S.A. Que las jóvenes MARÍA ALEJANDRA y ÁNGELA MARIA HOLGUÍN ZAPATA, en consideración a que se acreditó la calidad de beneficiaria de cada una de ellas conforme a la norma vigente, PROTECCIÓN S.A. les reconoció el 50% de la pensión, en una proporción del 25% para cada una, desde la fecha del fallecimiento de su progenitor, aunque una de ellas no acreditara los supuestos para continuar percibiendo la prestación. Y que, en cuanto a los intereses moratorios, atendiendo a la negativa y justificación sobre la verificación de la existencia de otra persona con igual derecho, se encontró una razón idónea en su momento para no reconocer la prestación y disponerse un porcentaje de la misma reserva, motivo por el cual, no hay lugar a su reconocimiento, por cuanto se solicita se absuelva sobre ese tópico.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver los problemas jurídicos, es necesario hacer un breve recuento de las pruebas anexadas por las partes:

- Respuesta dada por PROTECCIÓN S.A., al derecho de petición elevado por las demandantes, en lo que respecta al acrecimiento pensional.¹
- Reconocimiento pensional a la demandantes.²
- Copia registro civil de defunción del señor EDWIN ALFONSO HOLGUÍN.³
- Documento elaborado por la señora CLAUDIA ZAPATA, madre de las demandantes.⁴
- Declaración notarial de la señora DIANA BERENICE HOLGUÍN, hermana del causante.⁵
- Documentos anexados por la parte actora, mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento realizado por el juzgado, con respecto a la acreditación de dependencia en razón a los estudios de las demandantes.⁶
- Pagos realizados por PROTECCIÓN S.A. a las demandantes.⁷

De acuerdo a lo anterior, el **problema jurídico** a resolver, es determinar: **i)** si las demandantes tienen derecho al acrecimiento de la mesada pensional; y de proceder dicho acrecimiento, **ii)** se analizará si se debe condenar a los intereses moratorios; **iii)** y si hay lugar a la absolución de las costas procesales impuestas a PROTECCIÓN S.A.

i) Acrecimiento pensional.

En lo que respecta al acrecimiento pensional de las pensiones de sobrevivientes, no existe duda alguna que, en caso de reducirse el número de beneficiarios por muerte o extinción del derecho, el monto de la pensión

¹ Folios 7 a 12 de la demanda y folios 34 a 36

² Folios 13 a 16 de la demanda y folios 30 a 33 de la contestación de la demanda

³ Folio 22

⁴ Folio 25 de la demanda

⁵ Folio 25 de la contestación de la demanda

⁶ PDF25 folios 4 a 14

⁷ PDF26 folios 3 a 6

deberá acrecentarse proporcionalmente a la prestación económica que ostentan los demás beneficiarios que conservan el derecho pensional.

Para esta Sala, después de un análisis de las pruebas anexadas al expediente, no hay duda alguna que la pensión de sobrevivientes se debió acrecentar a las demandantes en un 50% que fue dejado en reserva, pues se dejó acreditado dentro del proceso, que la señora LUZ MARINA PÉREZ supuesta compañera del causante fallecido, no acreditó el requisito de la convivencia como lo exige la ley.

Conforme a lo anterior, si bien no existe duda alguna que conforme al artículo 34 del decreto 758 de 1990, cuando existe una controversia entre beneficiarios se debe suspender el pago de la misma, esta norma por ningún lado indica que dicho pago debe ser dejado en *suspense indefinidamente*, sino por el contrario que debe ser la justicia ordinaria la que debe dar solución a quien corresponde realmente el derecho.

Así pues, en la demanda se anexó el documento elaborado a mano alzada por la señora CLAUDIA MARÍA ZAPATA BENJUMEA, quien es la madre de las demandantes, y la cual afirma que ella no convivía con el demandante desde el año 2008, y que 6 meses antes del fallecimiento del señor EDWIN ALFONSO HOLGUÍN, convivía con la señora LUZ MARINA PÉREZ.

Conforme al párrafo precedente, debe decirse que existe un principio universal el cual consagra que la prueba no puede ser creada por quien la invoca, y si bien la señora CLAUDIA ZAPATA no está solicitando el derecho a título propio, de manera indirecta se logra un provecho o beneficio del mismo, situaciones ésta, que afectan su credibilidad e imparcialidad.

No obstante, en la contestación de PROTECCIÓN S.A., se anexó la declaración extra juicio realizada por la señora DIANA BERENICE HOLGUÍN, quien es hermana del causante, la cual señala que: *“al momento de su muerte tenía dos hijos de nombre MARIA ALEJANDRA HOLGUIN ZAPATA Y ÁNGELA MARÍA HOLGUIN ZAPATA, convivió 14 años con la señora CLAUDIA MARÍA ZAPATA BENJUMEA, hasta dos años antes de su muerte y al momento de su muerte convivió bajo el mismo techo, lecho y mesa durante dos meses, con la señora LUZ MARINA PEREZ.”* (Negrilla de la Sala).

De acuerdo a lo relacionado en los párrafos precedentes, para la Sala, al igual que lo señaló el juez, no existen otros elementos de prueba, para que la entidad administradora deje en suspenso el porcentaje pensional faltante a las beneficiarias que acreditaron el derecho de manera suficientemente comprobada, tanto es así que nunca existió otra reclamación al respecto, habiéndose presentado la publicación por edictos para hallar posibles beneficiarios realizada por la demandada⁸, como tampoco acudió al presente proceso la señora LUZ MARINA PEREZ quien fue citada por el juzgado para que asistiera en calidad de interviniente excluyente.

Por tal razón, las únicas beneficiarias del 100% del derecho pensional, deben ser las hijas del causante hoy demandantes, tal y como se indicó en la sentencia de primera instancia. Debiéndose en este sentido **CONFIRMAR** la sentencia.

ii) Intereses moratorios.

Sobre la inconformidad planteada frente a los *intereses moratorios*, es claro que éstos fueron creados por la ley 100 de 1993, para resarcir el pago de las mesadas pensionales que no fueron canceladas oportunamente por la entidad de seguridad social, la cual estaba obligada al pago de las mismas, como lo prevé el artículo 141 de la citada ley.

En este orden de ideas, la mora de la entidad sólo opera luego de pasados dos meses de radicada la solicitud de reconocimiento pensional, con el lleno de los requisitos, lo cual es apenas lógico, puesto que la entidad, dentro de tal plazo y una vez presentada la solicitud de la pensión por parte del beneficiario, previo al reconocimiento del derecho, debe entrar a corroborar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la normatividad aplicable.

En lo que respecta a la apelación interpuesta por el apoderado de la demandada, debe señalarse que existen escenarios excepcionales y puntuales para el no reconocimiento de los intereses, como lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3785-2020, en donde indicó:

⁸ PDF11 folio 32

*“...la Corte también ha reconocido que existen algunos escenarios excepcionales y muy precisos en los que no se puede asumir que la entidad administradora de pensiones esté en mora de pagar las prestaciones que están a su cargo, bien porque actúa con apego al ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas (ver CSJ SL6326-2016, CSJ SL8552-2016, CSJ SL4948-2017, CSJ SL072-2018 y CSJ SL984-2019) o **porque existe algún conflicto entre potenciales beneficiarios de la pensión, que solo puede ser dirimido por la justicia ordinaria** (CSJ SL704-2013, CSJ SL13369-2014, CSJ SL14528-2014, CSJ SL11940-2017, CSJ SL1354-2019 y CSJ SL2239-2019, entre otras)”* (Negrilla de la Sala)

De acuerdo a la jurisprudencia relacionada, debe indicarse que en el caso objeto de estudio se presenta claramente un conflicto entre beneficiarios de la prestación económica, por tal razón, debe manifestarse que no son procedentes los mismos; aunado a lo anterior, la disposición que consagra los intereses es clara al indicar que los intereses moratorios proceden por la tardanza en el pago de las mesadas, y en el caso de autos, lo pretendido es el acrecimiento de la pensión de sobrevivientes, es decir las accionantes si venía disfrutando de una mesada en su porcentaje correspondiente, sin existir un retardo en el pago que les correspondía en dicho momento.

Por tal razón, se **REVOCARÁ** la decisión tomada por el juez de primera instancia en este sentido.

Sin embargo, es de advertir que, los efectos de la inflación son quizá más significativos en el campo laboral y de la seguridad social, dado el carácter alimentario de las prestaciones que el empleador o la entidad de seguridad social debe al trabajador o pensionado, y por lo tanto la doctrina y la jurisprudencia acuden a la corrección monetaria con el fin de procurar que el pago de lo debido sea cabal, íntegro o completo, o dicho en otros términos que el deudor cubra la prestación en su valor real.

Sobre el tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL359-2021, con radicado 86405 ha expresado:

“...Ahora, la indexación no implica el incremento del valor de los créditos pensionales, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso

del tiempo. Tampoco puede verse como parte de la mesada, puesto que no satisface necesidades sociales del pensionado, y menos como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, garantiza que los créditos pensionales no pierdan su valor real.

Desde este punto de vista, cuando el juez del trabajo advierte un menoscabo a los derechos de las partes y, por este motivo, impone el pago de prestaciones económicas derivadas del sistema de pensiones, su labor no puede limitarse a la restitución simple y plana de dichos rubros; tiene la obligación de imponer una condena que ponga al perjudicado en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, según el cual «dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales». Y la forma en que aquello se garantiza, en el marco de la protección especial a la seguridad social, es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda...”

Añadió la Corte en la sentencia referida que **la indexación procede de manera oficiosa** y que ello **no viola la congruencia que debe existir entre las pretensiones de la demanda y la sentencia judicial**. Señaló en tal sentido la corporación:

“Debe insistirse en que la indexación no aumenta o incrementa las condenas, sino, más bien, garantiza el pago completo e íntegro de la obligación. Sin la indexación, las condenas serían deficitarias y el deudor recibiría un menor valor del que en realidad se le adeuda, premisa que tiende a agudizarse en tiempos de crisis y congestión judicial.

En suma, la imposición oficiosa de la actualización no viola la congruencia que debe existir entre las pretensiones de la demanda y la sentencia judicial. Por el contrario, pretende, con fundamento en los principios de equidad e integralidad del pago, ajustar las condenas a su valor real y, de esta manera, impedir que los créditos representados en dinero pierdan su poder adquisitivo por el fenómeno inflacionario. Es decir, procura que la obligación se satisfaga de manera completa e integral”

Por lo anterior, se **CONDENARÁ** a PROTECCIÓN S.A. a indexar las mesadas pensionales objeto de esta sentencia, con base en la certificación mensual del Índice de Precios al Consumidor –IPC-, expedida por el DANE, entre la causación de cada mesada y hasta el momento efectivo del pago.

iii) Costas procesales

En lo que tiene que ver con las **costas procesales** impuestas a PROTECCIÓN S.A., en innumerables providencias se ha dejado claro que nuestra ley procesal, ha consagrado en esta materia el criterio objetivo, es

decir, que las costas corren en todo caso a cargo del vencido en juicio, sin que sea admisible tener en consideración la conducta asumida por las partes dentro del mismo, es decir, sin considerar si se actuó o no de buena fe, ya que sólo basta con el hecho de haber resultado vencido en juicio para que se imponga tal condena, y en el presente caso, PROTECCIÓN S.A. fue el único vencido, pues tiene la obligación de reconocer la prestación económica solicitada, debiéndose **CONFIRMAR** en tal sentido la sentencia.

En consecuencia, de todo lo anterior, es que la Sala concluye que la sentencia que se revisa por vía de apelación, merece ser **REVOCADA** y **CONFIRMADA**.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas.

Costas de la primera instancia como lo manifestó el juez. En esta son a cargo de la parte demandada, por no salir avante el recurso de apelación. Las agencias en derecho de la segunda instancia se tasan en la suma de \$1'160.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Se **REVOCA** la sentencia que se revisa por vía de apelación, y en su lugar se **ABSUELVE** a **PROTECCIÓN S.A.** de los **intereses moratorios**.

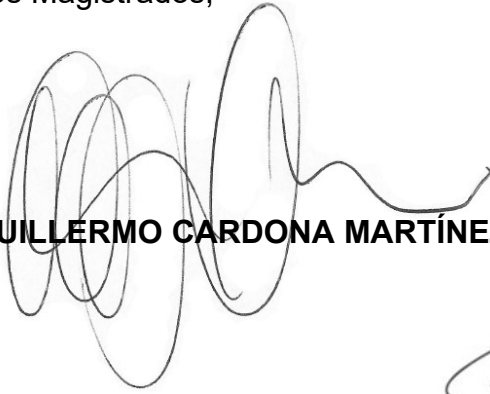
SEGUNDO: Se **CONDENA** a **PROTECCIÓN S.A.** a reconocer y pagar a las demandantes la **indexación** de las mesadas pensionales reconocidas en primera instancia, tal y como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia.

CUARTO: Costas y agencias en derecho como se dejó dicho en la parte motiva de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	María Alejandra Holguín Zapata y Ángela María Holguín Zapata
DEMANDADO	Protección S.A.
RADICADO	05-001-31-05-010-2016-00878
DECISIÓN	Revoca y confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 16 de marzo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 16 de marzo de 2023 a la 5:00 pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO